

Decimodécima.—De la normativa aplicable.

La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, a las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; y en lo no previsto en las mencionadas normas, por el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Decimotercera.—Vinculación de las bases.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999, recurso de reposición potestativamente ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de éstas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde la fecha anteriormente indicada, en virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.

Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el alcalde podrá modificar o dejar sin efecto las convocatorias mediante la adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en la forma prevista.

Anexo. Temario.

A) Materias comunes.

Tema 1. Principios generales. La Administración Local. Las comunidades autónomas. Distribución de competencias.

Tema 2. El Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno. Los ministros. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.

Tema 3. Otras instituciones: El Síndico de Agravios y el Consejo de Cultura. La Sindicatura de Cuentas.

Tema 4. Los conceptos de Administración Pública y derecho administrativo.

Tema 5. La jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso. Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Tema 6. El acto administrativo: concepto, elementos y clases.

B) Materias específicas de profundización de las materias comunes.

Tema 7. Normas reglamentarias. Legislación autonómica sobre régimen local.

Tema 8. El alcalde. Los tenientes de alcalde. El pleno. La Comisión de Gobierno.

Tema 9. La actividad de fomento.

Tema 10. Servicios obligatorios. Iniciativa pública en la actividad económica. Planes provinciales. Fórmulas asociativas de municipios para la prestación de servicios. Los montes vecinales en mano común.

Tema 11. Formas de selección del contratista. Derechos y obligaciones de las partes. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Cumplimiento e incumplimiento de los contratos administrativos. La invalidez de los contratos administrativos y su resolución.

Tema 12. Ejecución del planeamiento y sistemas de actuación. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. El patrimonio municipal del suelo. La expropiación forzosa.

Tema 13. Reclamaciones y recursos en materia tributaria.

Tema 14. La autonomía financiera de las entidades locales. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales: contenido, principios genera-

les y derecho transitorio. La coordinación de la hacienda estatal, autonómica y local. La estructura presupuestaria.

C) Materias específicas relacionadas con el puesto de trabajo.

Tema 15. Procedimiento administrativo en la Administración Local. Particularidades de los actos de los órganos colegiados. Certificaciones. Notificación de los actos administrativos: reclamaciones y recursos.

Tema 16. Procedimientos de gestión de recursos humanos. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situación administrativa de los funcionarios de carrera: supuestos y efectos de cada una de ellas.

Tema 17. Los créditos presupuestarios y las fases de gasto público. La ordenación del pago. Control e intervención del gasto y régimen de cuentas.

Tema 18. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de transferencias corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos «en firme» y «a justificar». Justificación de los libramientos.

Tema 19. La contabilidad como instrumento de gestión económica. La apertura de la contabilidad, los libros. El balance y cierre de la contabilidad.

Tema 20. Arquitectura de ordenadores: La unidad central de proceso. La memoria central, la unidad aritmética y lógica. Evolución de la estructura de los ordenadores.

Tema 21. La periferia de un ordenador. Soportes de la información. Equipos transcriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida. Canales de entrada y salida.

Tema 22. El lógico: diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto de programa. Los lenguajes de programación. El lógico funcional o sistema operativos. Los paquetes de programa. Definición de registro.

Tema 23. Estructuras de almacenamiento de datos. Tipos de ficheros. Métodos de acceso. Las bases de datos: características, objetivos y tipos.

Tema 24. Sistemas físicos más utilizados. Los ordenadores personales.

El Marenys, a 4 de octubre de 2006.—El alcalde, Vicent Olivert Vivó.

23992

Ayuntamiento de Gestalgar

Edicto del Ayuntamiento de Gestalgar sobre aprobación definitiva Ordenanza Reguladora de los Usos y Costumbres Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los Caminos Rurales.

EDICTO

Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de julio de 2006, de la Ordenanza Reguladora de los Usos y Costumbres Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los Caminos Rurales Municipales, se publica el texto íntegro para su entrada en vigor

Ordenanza Reguladora de los Usos y Costumbres Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los Caminos Rurales Municipales Exposición de motivos

Las actividades agrarias tradicionales se encuentran en nuestros días en una situación difícil, como consecuencia de las transformaciones sociales y económicas que polarizan el ámbito de la actividad humana hacia tareas relacionadas con el sector industrial, agrario, terciario y de servicio; para evitar este abandono de lo agrario se han dictado leyes de modernización de las explotaciones agrarias. Como ejemplo, podemos citar la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, Ley 19/1995; también la Comunidad Autónoma Valenciana ha dictado su propia Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias (Ley 8/2002, de 5 de diciembre); ambas normas, en perfiles generales, abordan medidas tendentes a optimizar la calidad y el rendimiento económico de las explotaciones agrarias en el afán de potenciar la competitividad del sector.

Pero ésta es una competencia que reside en las comunidades autónomas y en el Estado, a las que sólo pueden aportar soluciones los municipios a través de las regulaciones que, en sus planes generales, efectúen respecto del suelo no urbanizable, sin olvidar la posibilidad, legalmente establecida, de clasificar suelo no urbanizable en función de los valores agrícolas que se quieran proteger.

En Gestalgar, frente a una incipiente actividad industrial, coexisten usos agrarios del suelo que merecen ser protegidos para velar por la tradición rural que hasta la industrialización ha caracterizado los usos y costumbres de esta localidad.

Estos usos y costumbres, la norma consuetudinaria, es una fuente del derecho que no está escrita, y que cobra una especial importancia a la hora de resolver los litigios que se suscitan como consecuencia del ejercicio de la agricultura. La presente ordenanza, por tanto, pretende «positivar» ese cuerpo consuetudinario de normas para la mejor resolución de los conflictos intersubjetivos que puedan plantearse, tan frecuentes en la realidad por la distorsión en la correcta inteligencia de este «corpus» de normas. No puede extrañar que la pluralidad de matices de la vida local consagre una serie de prácticas de cuya obligatoriedad tienen conciencia todos los vecinos.

Otro aspecto que introduce la presente ordenanza, que no es sino trasunto del régimen jurídico que se contiene en la legislación sobre suelo no urbanizable, es el relativo al deber de conservación del suelo. Efectivamente, en la actualidad se acepta con cierta normalidad la situación de no explotación y ni siquiera de conservación en condiciones de una finca en suelo rústico, de un terreno rural. En este sentido, ninguna duda cabe acerca del deber de un propietario de finca rústica, no sólo de no crear las condiciones para que sean posibles estragos colectivos (tales como la erosión del terreno, las inundaciones), sino, asimismo, proteger un bien de dimensiones colectivas o sociales, como es la vegetación. De ahí que sea trasladable al suelo no urbanizable el deber genérico de conservación previsto universalmente para el suelo urbano y urbanizable, con las matizaciones que deben introducirse en esta categoría de suelo rústico.

La segunda tarea que pretende abordar la presente ordenanza es la de reglamentar las condiciones de uso de los caminos rurales municipales, entendidos como bienes de dominio y uso público de titularidad local que se caracterizan por ser soporte de las actividades agrarias. Respecto a esta clase de caminos existe una gran orfandad normativa; pero lo cierto es que el artículo 25.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, prevé que el municipio ejercerá competencias en materia de «conservación de caminos y vías rurales»; aunque, ciertamente, esa competencia se ha de ejercitar en el marco de la legislación estatal o autonómica sectorial.

En principio, en la Comunidad Valenciana, la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, es la única norma que se ocupa de los caminos públicos. Esta ley establece, en su artículo 3, que forman parte de sistema viario los caminos públicos aptos para el tránsito rodado; y reconoce, en el artículo 12.1, que los municipios tiene competencia para la: «proyección, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los tramos de la red local y de los caminos cuya titularidad les corresponda, así como el ejercicio por las mismas de las funciones de disciplina viaria, todo ello sin perjuicio de los convenios que puedan alcanzar con la Generalitat para el desempeño efectivo de estas funciones.»

Partiendo del respeto a las normas sectoriales, no cabe duda de que el municipio, a través de su potestad de ordenanza, puede completar el régimen jurídico de protección y uso de sus bienes públicos; esa potestad se deriva del hecho jurídico de la titularidad del bien y de la afectación de éste, material o no, a la prestación de un uso colectivo. El artículo 74 del texto refundido sobre las disposiciones vigentes en materia de régimen local, nos dice que son bienes demaniales de uso público «los caminos [...] cuya conservación y policía sean de competencia municipal»; y, por su parte, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, nos recuerda, en su artículo 76, que existe una genérica potestad normativa en torno a los bienes de uso y dominio público, sin duda alguna, para garantizar su utilización colectiva.

La presente ordenanza pretende dar cumplimiento a estas finalidades, estableciendo una regulación sencilla y ajustada a las peculiaridades existentes en este término municipal.

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Es objeto de la presente ordenanza la regularización de los usos y costumbres que, dentro del ámbito rural se viene practicando en el término municipal de Gestalgar, adecuándolos al marco social actual, todo ello sin perjuicio de las funciones de cooperación, colaboración e información recíproca que deben presidir las relaciones entre Ayuntamiento y administraciones con competencia sectorial en las materias a las que alude esta ordenanza, conforme a lo previsto en

el artículo 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La presente ordenanza también tiene por objeto la regulación de las condiciones de uso y las características de los caminos rurales que circulan por el término municipal de Gestalgar, de forma que se potencie su funcionalidad como vías al servicio de las actividades agrarias.

Artículo 2. Vigencia.

1. La presente ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada, suspendida o anulada.

2. El Consejo Agrario Municipal, a la vista de los datos y resultado que suministre la experiencia en la aplicación de esta ordenanza, propondrá al pleno del Ayuntamiento cuantas reformas convengan introducir en la misma.

3. Cualquier propuesta de modificación, derogación o suspensión que afecte a esta ordenanza, requerirá el previo informe del Consejo Agrario Municipal.

Artículo 3. Presunción de cerramiento de fincas rústicas.

A efectos de la aplicación de esta ordenanza, y siempre que no conste la tolerancia o consentimiento del propietario, sea expresa o tácita, toda finca rústica del término municipal se considerará cerrada y acotada, aunque materialmente no lo esté.

Artículo 4. Prohibiciones.

1. A efectos de la aplicación de esta ordenanza y siempre que no conste la tolerancia o consentimiento del propietario, sea expresa o tácita, queda prohibido en las fincas rústicas, sus anejos y servidumbres, a tenor de la presunción establecida en el artículo anterior, lo siguiente:

- Entrar a recoger rastrojos, ramas, troncos o pajas.
- Entrar a recoger cítricos, hortalizas, verduras, frutas o cualquier tipo de fruto, ya sean caídos o no, ramas para injertos o cualquier otro fruto aún después de levantar las cosechas.
- Atravesar fincas ajenas cualquiera que sea el método que se emplee.
- Producir daños al regar en fincas o camino por «sorregamiento».
- Cazar incumpliendo la normativa estatal y autonómica sobre caza (o hasta que no se levanten las cosechas).

2. El propietario que se considere afectado por alguna de estas conductas u otras que estime le han reportado daño o perjuicio a su propiedad, podrá denunciar los hechos procediéndose en la forma establecida en el artículo 21 de la presente ordenanza, sin perjuicio de que aquél pueda ejercitarse cualesquier otras acciones que le asistan en derecho.

Artículo 5. Comisión de Valoración.

Dentro del Consejo Agrario Municipal se creará una Comisión de Valoración, pudiendo actuar el expresado Consejo Agrario Municipal como árbitro con sujeción a lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y sin perjuicio de que propietarios y agricultores puedan recabar la intervención del Consejo Agrario Municipal para resolver las disputas y controversias que surjan entre ellos. En caso de no haber acuerdo entre los contendientes, se seguirá la tramitación que se exprese a continuación.

1. Formulada una denuncia por el propietario, se requerirá al presunto infractor para que comparezca ante la Comisión de Valoración, compuesta por miembros del Consejo, técnicos municipales y servicio de policía rural, que actuarán como peritos, procederán a determinar los daños y su valoración, conforme al uso y costumbre de buen labrador, y se levantará acta, en la que harán constar:

- Día, mes, año y lugar de la valoración.
 - Personas que intervienen.
 - Daños, perjuicios y sustracciones ocasionados.
 - Criterio de valoración.
 - Cuantificación de los daños.
 - Firma de las personas que intervienen dando fe del acto.
2. La actuación del Consejo Agrario Municipal en estos actos tendrá el carácter de arbitraje entre las partes para la resolución extrajudicial y equitativa del conflicto planteado.

3. Si los hechos revistieran tales caracteres que pudieran ser considerados como delitos o faltas, se remitirá el parte oportuno al Juzgado de Instrucción competente.

Capítulo I. Servicios de guardería rural (policía rural).

Artículo 6. Funciones de vigilancia rural.

Son funciones de guardería o vigilancia rural, a desempeñar por personal del Ayuntamiento, las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que dicte la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento, relativas a la conservación y mejora de la naturaleza, medio ambiente, recursos hidráulicos, riqueza cinegética, piscícola, agrícola, forestal y de cualquier otra índole que estén relacionadas con los temas rurales y medio ambientales.

2. Garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y bandos del Ayuntamiento, en el ámbito de su actuación.

3. La vigilancia y protección del patrimonio municipal en lo que se refiere a las parcelas situadas en suelo no urbanizable o rústico, los espacios públicos rurales, así como la delimitación y demarcación del término municipal para su íntegra conservación.

4. Protección del hábitat rural y de las especies y clases de flora y fauna existentes en el término municipal, con especial atención a aquellas que se encuentran en vías de extinción.

5. Prestación de auxilio en casos de accidentes, catástrofes o calamidades públicas, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil que puedan tener incidencia.

6. Seguimiento de cultivos, plagas, factores climatológicos adversos, etc., en agricultura como en la ganadería, con la finalidad de aportar datos y estadísticas a las administraciones y entidades competentes.

7. Vigilancia y cuidado de la red de comunicaciones rurales (pistas, caminos, veredas, puentes, badenes, etc.), de los desniveles naturales (cañadas, barrancos, ramblas, etc.), y de las aguas incontroladas que puedan afectar a su integridad, así como vigilar los vertidos incontrolados, tanto sólidos como líquidos, que molestan y dañan al campo y al ganado.

8. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

9. Control y seguimiento de todas las actividades que se realicen y que estén calificadas de especial protección agrícola, forestal, paisajística o ecológica por el Plan General de Ordenación Urbana u otros instrumentos de ordenación y protección.

10. Colaborar con otros departamentos y servicios municipales en la práctica de notificaciones o realización de inspecciones puntuales relacionadas con el medio rural.

11. Emitir los informes que les sean requeridos por los órganos y las autoridades municipales.

12. Comunicar a la autoridad las infracciones de caza, epizootias y apicultura.

13. Todas aquellas relacionadas con el puesto de trabajo dentro del ámbito rural que se les encomiendan por los órganos y autoridades municipales.

Las anteriores funciones, en cuanto que impliquen ejercicio de autoridad, se llevarán a cabo por miembros del Cuerpo de Policía Local, sin perjuicio de la colaboración que a éstos pueda prestar el personal de vigilancia y custodia a que hace mención el artículo 16 de la Ley de la Función Pública Valenciana.

Capítulo II. De las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, así como cerramiento de fincas.

Artículo 7. Distancias aplicables a las plantaciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 591 del Código Civil.

Artículo 591

No se podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar o, en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.

Se regulan en este capítulo las distancias de separación para la plantación de árboles, que serán las siguientes:

1. La distancia de separación de los árboles que se planten junto a las parcelas colindantes o junto a una pista o camino serán:

—2,5 metros: Cepas y análogos.

—3 metros: Cítricos, perales, manzanos, melocotoneros, ciruelos, nísperos y análogos.

—4 metros: Albaricoquero, olivo, cerezo, caqui, azofaifo, laurel y avellano.

—5,5 metros: Almendro, palmera, pistacho y moreras.

—7 metros: Algarrobo, higuera, nogal y coníferas o resinosas.

—10 metros: Plataneros, eucaliptos, otras frondosas no reseñadas en distancias anteriores y análogos.

2. Si en lugar de plantaciones hubiera un árbol o árboles aislados, las distancias a guardar deberán tener en cuenta su mayor desarrollo que cuando se trata de una plantación.

3. Si a pesar de guardar esas distancias de separación se hiciera sombra al vecino, los árboles deberán retirarse un porcentaje más en función de su altura o, en su caso, desmocharse.

Artículo 8. Corte de ramas, raíces y arranque de árboles.

1. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren o nazcan a una distancia de su finca menor que la establecida en el artículo anterior.

2. Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre finca o camino colindante, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, aun cuando se hayan guardado las distancias señaladas. Tendrá efectos el mismo a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza.

3. Si son raíces de los árboles vecinos las que se extienden en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí, dentro de su finca, aun cuando se hayan guardado las distancias señaladas, también si estas raíces causaran daño a las obras.

4. No podrá realizarse ninguna tala de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleada parque y aquellos ejemplares que por sus características posean interés botánico o ambiental especial, sin la preceptiva licencia municipal.

Artículo 9. Distancias y separaciones en el cerramiento de fincas rústicas.

A falta de acuerdo y conforme a lo legalmente prevenido, se respetará la costumbre tradicional en lo referente a obras, plantaciones de setos vivos, setos muertos, cercas de alambre o vallas para el cerramiento de fincas rústicas, de manera que no perjudique a los colindantes, cumpliéndose lo establecido en la presente ordenanza, además de lo previsto en el plan general de ordenación urbana u otras normas urbanísticas respecto del suelo no urbanizable.

Con carácter general, la delimitación de las fincas rústicas se efectuará mediante «hitas» de 10 cm, que según el desnivel entre las parcelas se colocarán de la siguiente manera:

1. Fincas que se encuentren al mismo nivel o que presenten un desnivel de 30 cm como máximo: se considerará que la «hita» está en el centro del margen, y, por consiguiente, el mantenimiento del mismo corresponderá a los propietarios de ambas parcelas por igual.

2. Fincas que presenten un desnivel superior a 30 cm: por lo general, la «hita» se colocará en el límite del margen de la finca más baja. En este caso, el mantenimiento y conservación del margen corresponde al dueño de la finca más elevada.

Con carácter específico, para el cerramiento de las fincas se ajustará a las siguientes normas:

A. Cerramiento con alambres y telas transparentes.

En el supuesto de que no exista acuerdo entre los dueños de las fincas colindantes para el cerramiento de una finca rústica con alambrada o tela, podrá hacerlo uno de ellos dentro del terreno de su propiedad, respetando el mojón medianero en toda su longitud.

En general el mojón medianero o hita será de 10 centímetros para la separación de propiedades y, caso de no haberlo, se entenderá de dicha medida y como si las fincas estuvieran amojonadas.

Cuando se pretenda colocar piquetas y tela metálica, será precisa la previa licencia del Ayuntamiento y de la comunidad de regantes, cuando le afecte; debiéndose estar a las condiciones establecidas en el plan general de ordenación urbana u otras normas urbanísticas para el vallado de fincas en suelo no urbanizable.

En ningún caso el vallado afectará a las vías rurales municipales colindantes, debiendo estar los mástiles de soporte íntegramente en la parcela que se valla.

B. Cerramientos con setos muertos, secos o de caña.

Caso de no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas colindantes para el cerramiento con setos muertos, secos o de cañas secas, podrá hacerlo cada uno de ellos dentro del terreno de su propiedad, separándose cuarenta centímetros de linde divisorio o centro del mojón medianero, hasta una altura de 2,20 metros. En el supuesto de que se produjera sombra a consecuencia del cerramiento éste deberá retirarse hasta el límite necesario para permitir el paso de la luz solar al colindante.

Además de los citados 40 centímetros de separación, para la colocación de la valla, si se linda con camino y las condiciones del terreno así lo exigen, por existir taludes o terraplenes, se deberá dejar también cuneta.

C. Cerramiento de setos vivos.

Caso de no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas colindantes para el cerramiento con setos vivos, podrá hacerlo cada uno de ellos plantando dentro de su propiedad, separándose un metro de linde divisorio o centro de mojón medianero, hasta una altura máxima de dos metros, de manera que se retirará un metro por cada metro de mayor elevación sólo en el supuesto de que se produjera sombra o cualquier otro perjuicio al vecino colindante.

D. Cerramiento de obra.

Todo propietario podrá cerrar sus heredades por medio de valla con arreglo a estas condiciones:

a) La altura de la base de obras será de 50 centímetros, siendo el resto de la tela metálica hasta una altura máxima de 2,20 m.

En el caso de que este cerramiento de vallas altere el curso natural de las aguas pluviales, no se permitirá el levantamiento de base de obra o, bien, en dicho muro, se deberán hacer los correspondientes aliviaderos (cada dos metros y con cuarenta centímetros de abertura en el mismo).

La base de obra deberá ser enlucida y procurando que armonice con el paisaje y entorno.

b) Se dejará una separación mínima entre heredades de 40 centímetros que se ampliará en función de la altura del vallado para evitar que la obra produzca sombra en el predio contiguo.

c) Las obras no podrán realizarse sin previa solicitud y obtención de licencia municipal, que se otorgará teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el plan general de ordenación urbana para el suelo no urbanizable.

Cualquier obra mayor, como la construcción de una vivienda aislada, deberá guardar, además, si linda con algún camino:

Separación a colindantes, mínimo diez metros (10 m).

Separación caminos, diez metros (10 m) desde el eje, y superficie caseta riego, 15 m², respetando siempre las condiciones previstas en el plan general de ordenación urbana y en la legislación urbanística.

E. Chaflanes.

En las fincas que hagan esquina a dos caminos rurales o en los linderos con caminos con giros pronunciados o bruscos será obligatorio, para permitir la visibilidad del tráfico, que los cerramientos formen chaflán; a tal efecto, la forma del chaflán deberá ser (el doble de ancho del camino) la adecuada como para permitir el giro de la maquinaria agrícola que habitualmente discurre por la zona.

F. Invernaderos.

Los invernaderos que se construyan en las fincas se separarán, como mínimo, setenta y cinco centímetros del centro del mojón medianero, obligándose a canalizar las aguas por dentro de su finca hasta un desagüe, sin perjuicio de terceros.

Para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, de las previstas en los apartados anteriores o de muretes para canalizaciones, hijuelas o canales de desagües lindantes con carreteras o caminos rurales, se exigirá la previa licencia municipal, en la que se comprobará la idoneidad de lo proyectado respecto del plan general de ordenación urbana.

Capítulo III. Animales.**Artículo 10. Animales.**

Con observancia de lo previsto en el Ley 4/94, de 8 de julio, de las Cortes Valencianas, y de lo previsto en la legislación sectorial de preferente aplicación, deberán respetarse las prevenciones que siguen:

1. Animales domésticos.

Queda prohibido dejar suelto sin pastor el ganado y los animales domésticos en predios que no se hallen cerrados.

Las cabezas que no formen parte de un rebaño permanecerán atadas mientras se hallen pastando.

Los perros dedicados a la guarda de heredades sólo podrán estar sueltos en fincas cerradas; en las abiertas deberán estar sujetos, salvo que estén controlados, para evitar que acometan a las personas que transiten por los caminos y que causen daños en las fincas colindantes.

Los dueños de perros observarán las disposiciones establecidas en la normativa general sobre circulación de animales sueltos, así como la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Compañía.

2. Prescripciones sobre caza.

En todo lo referente a caza, se observarán estrictamente las disposiciones dictadas por la administración competente; se prohibirá la caza en aquellos campos que cuenten con instalaciones de riego por goteo u otras similares, aunque no haya cosechas.

3. Normas apicultores.

La distancia de ubicación de las colmenas será, como mínimo, la de 100 metros de los caminos o de los núcleos de población, o tránsito de personas. Debiéndose obtener, en todo caso, el permiso previo del Ayuntamiento para colocar las mismas, así como cualquier otra autorización administrativa que sea menester, conforme a las normas que apruebe la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria competente en materia de agricultura, especialmente aquellas que se refieren a las distancias para limitar la polinización entre cruzada de plantaciones de cítricos.

Capítulo IV. Caminos municipales.**Artículo 11. Caminos municipales.**

Con entera observancia de lo prevenido en la Ley Valenciana 6/91, de 27 de marzo, y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, se entiende a los efectos de esta ordenanza que son carreteras, caminos y pistas rurales, todos aquellos de dominio público municipal y de uso común general susceptibles de tránsito rodado que discurren por el término municipal. Cuando atraviesen terrenos clasificados de suelo urbano o urbanizable o por núcleos de población identificados en suelo no urbanizable, los tramos afectados tendrán la consideración de calles o viarios de acceso a las parcelas, con el tratamiento propio de ésta.

(Clasificación de los caminos municipales.)

Artículo 12. Normas aplicables a las servidumbres de paso entre parcelas privadas.

1. Cuando se haya constituido una servidumbre de paso y salvo que en el título no se disponga o resulte otra cosa, se resumirá que tiene la siguiente anchura para las necesidades del predio dominante:

a) Cuando no existe junto a ella ninguna acequia, ribazo o similar, la anchura será de tres metros y veinticinco centímetros.

b) Si es recta y tiene por un lado acequia, ribazo o similar y no hay peligro, la anchura será igualmente de tres metros y veinticinco centímetros.

c) Si por los dos lados de la senda, existiera una acequia, ribazo o cualquier otro obstáculo de peligró, o tuviera curva en su trazado o paredes demás de ochenta centímetros, la anchura deberá ser de veinticinco centímetros más.

2. La anchura de las servidumbres o caminos particulares existentes se ampliará por los usuarios, siempre pagando en proporción a la superficie de las fincas a las que da servicio.

3. En la determinación de las indemnizaciones por las servidumbres, así como en la fijación del precio a pagar por el terreno que se ocupe, deberá intervenir el Consejo Agrario si las partes no se han podido poner de acuerdo y siempre antes de que se determine judicialmente.

4. El usuario del paso en estas servidumbres o caminos privados tiene la obligación de mantener el camino de paso en óptimas condiciones, teniendo incluso el derecho de llenar o rebajar en su caso el mismo, siempre, por supuesto, que no perjudique al vecino, con el fin de evitar encharcamientos por riego y lluvia.

5. La servidumbre de paso deberá seguir respetándose aunque discorra parcial o totalmente por una zona que se haya calificado como urbana.

Artículo 13. Balsas de agua.

Todas las balsas de agua que se construyan estarán cerradas en su perímetro con una valla vegetal o metálica que tendrá dos metros de altura.

Las balsas de agua se clasificarán según esta distinción:

—Si la balsa no sobrepasa 90 cm, la cota del terreno se considera balsa no elevada.

—Si la balsa supera 90 cm, la cota del terreno se considera balsa elevada.

Será necesario aportar proyecto técnico siempre que la balsa sea de obra y también si tiene una capacidad superior a 150 m³.

En todo caso, se tendrá en cuenta que se ha de hacer un vallado vegetal de márgenes.

Las separaciones a límites y caminos serán las siguientes, en función de su elevación y capacidad, de acuerdo con la escala siguiente:

1. Cuando se trate de balsas que no sobrepasen los 90 cm, la cota de terreno será (balsas no elevadas):

—Si tiene menos de 150 m³ de capacidad, la distancia de separación será de 2 metros a márgenes y caminos.

—Si la capacidad está entre 150 y 500 m³, la distancia de separación será de 3 metros a márgenes y caminos.

—Si la capacidad es superior a 500 m³, la distancia de separación será de 4 metros a márgenes y caminos.

2. Cuando se trate de balsas que sobrepasen los 90 cm, la cota de terreno será (balsas elevadas):

—Si tiene menos de 150 m³ de capacidad, la distancia de separación será de 10 metros a caminos y 10 metros a márgenes.

—Si la capacidad es superior a 150 m³, la distancia de separación será de 16 metros a caminos y 10 metros a márgenes.

Artículo 14. Puntos de agua.

El Ayuntamiento mantendrá en buen estado los abrevaderos y puntos de agua existentes, excepto en caso de que su deterioro sea debido al mal uso del ganadero o agricultor que los utiliza que, por consiguiente, se constituirá en responsable de su reparación.

En caso de que el agricultor o ganadero responsable no repare el abrevadero, lo hará el Ayuntamiento con cargo a aquél.

Artículo 15. Deber de conservación.

Los propietarios de suelo no urbanizable genérico o sujeto a especial protección deberán cumplir los deberes de conservación previstos en la legislación urbanística sobre suelo no urbanizable, así como abstenerse de realizar actuaciones que supongan la contaminación del agua, la tierra o el aire. Para el cumplimiento efectivo de este deber, el Ayuntamiento está facultado para dictar las oportunas órdenes de ejecución.

Artículo 16. Anchuras y distancias de separación de los cerramientos.

1. Los caminos municipales, a lo largo de todo su recorrido, tendrán una anchura mínima de 6 m. Los propietarios de terrenos colindantes a un camino municipal que pretendan cercar su propiedad, deberán retirarse cincuenta centímetros del límite de la vía, cuando el camino cuente ya con una anchura de 6 m; en caso contrario, el propietario que pretenda acotar su propiedad mediante cualquier construcción, instalación o seto, deberá retirarse a una distancia de 3,5 m, contados desde el eje de la vía.

Artículo 17. Normas generales de protección de los caminos municipales.

Para un adecuado uso común general de los caminos municipales, se establecen las siguientes reglas de uso:

1. Prohibición de variar linderos.

Se prohíbe distribuir o trasladar los postes o señales indicadores de los límites de las propiedades particulares, caminos o del término municipal.

2. Prohibición de obstrucción.

Los caminos, cañadas, travesías y demás servidumbres destinadas al tránsito de las personas y ganado no podrán cerrarse, obstruirse ni estrecharse bajo concepto alguno. Tampoco se podrá edificar dentro de las líneas de servidumbre.

Los dueños de las fincas colindantes con los caminos tendrán obligación de cortar todas las ramas, cañas y malezas que molesten el tránsito por la vía pública.

Las tierras, piedras o arbolado que por las lluvias o por cualquier otro motivo de fuerza mayor se desprendan de las fincas sobre el camino, serán retiradas por el propietario del camino. En otros supuestos, serán retiradas por el propietario de las mismas.

3. Prohibición de ocupación.

No se consentirá a los particulares incorporar, en todo o en parte, a sus posesiones, estas vías de comunicación, ni llevar a cabo construcciones, como vallados, cercas, etc., que mermen los derechos de la comunidad vecinal.

El Ayuntamiento dispondrá la restitución de los primeros al dominio público y la demolición de los segundos, ordenándose por la autoridad municipal si no ha transcurrido un año y un día desde la ocupación o construcción. Si mediara más tiempo, se acudirá a los tribunales competentes.

4. Prohibición de causar daños en caminos y servidumbre públicas.

Se prohíbe causar daños en los caminos y servidumbres públicas, así como extraer de ellos piedra, tierra o arena.

Las cañadas, veredas y abrevaderos para el tránsito y uso de ganados se hallarán siempre expeditos, ventilándose cuantas contiendas se susciten sobre reconocimiento y deslindes de los mismos, con arreglo a la vigente legislación.

Asimismo, no se permitirá el arrastre directo por los caminos de ramajes, aperos de labranza o materiales de construcción.

Los dueños de las heredades lindantes con los caminos no podrán impedir el libre curso de las aguas que de éstos provengan haciendo zanjas o calzadas en el límite de su propiedad.

Está prohibida la quema de rastrojos o restos procedentes de la poda de arbolado en toda la superficie de los caminos municipales y sus servidumbres, debiéndose llevar a término estas quemas en el interior de parcelas privadas, con la adopción de las medidas adecuadas para no causar daños a los predios colindantes.

5. Normas de tránsito y circulación.

El tránsito por los caminos estará expedito constantemente, sin que en ellos pueda existir objeto alguno que los obstruya.

En ningún punto de ellos se permitirá dejar sueltas las caballerías o ganado, ni abandonados los vehículos.

Los ganados deberán ser conducidos por el centro de las vías dedicadas a su tránsito, sin rebasar los linderos de los predios inmediatos. Los infractores de este precepto serán multados o sufrirán la penalidad que los tribunales les impusieren si hubiesen causado daño o introducido el ganado al pasar en propiedad ajena.

Las caballerías y vehículos que circulen por los caminos deberán hacerlo por su derecha, dejando el resto de la vía para los que llevan la dirección contraria.

Cuando los caminos particulares o de servicio de varias fincas estén cerrados, por haber dado su consentimiento o permiso todos los usuarios de los mismos, dichos cerramientos deberán ser perfectamente visibles, tanto a la luz del día como de noche, para lo cual deberán contener elementos fluorescentes o signos que los distinga desde cierta distancia, evitando de este modo accidentes al circular por los mismos.

6. Autorización para instalar verjas o construir muros de cerramiento.

No podrá ser construido ningún muro de cerca sin previa licencia municipal, en la que se fijarán las condiciones de alineación y rasante a que deben someterse, y se verificará el ajuste de lo solicitado a la legalidad urbanística aplicable.

En los caminos públicos no podrá ser ejecutada obra alguna para conducción de aguas o para cualquier otro objeto. Correspondrá a la Alcaldía otorgar la autorización correspondiente. En los caminos privados o sin salida para su cerramiento o la ejecución de cualquier obra se deberá contar con el permiso del Ayuntamiento.

7. Depósito de materiales en caminos municipales.

Se podrá depositar en las pistas o caminos rurales, para su entrada a las fincas particulares, con carácter excepcional y siempre que no pueda hacerse en el interior de la propia finca; estiércol y otros enseres de uso agrícola, durante un plazo de 48 horas, debiendo el interesado señalar debidamente dicho obstáculo y, en cualquier caso, dejar paso suficiente para el tránsito de personal y vehículos.

Los materiales de obra menores también podrán depositarse temporalmente en los caminos mientras duren esas obras y con las mismas condiciones y requisitos que en el apartado anterior. Cuando se trate de obras mayores, no podrán ocuparse caminos o pistas municipales o rurales.

Transcurrido el plazo señalado en los dos apartados anteriores sin que se hayan trasladado los enseres y materiales a una finca particular, el Ayuntamiento podrá retirarlo directamente y dejarlos dentro de lo que sea la propiedad del interesado a costa de éste.

8. Establecimiento de vehículos con carga y descarga en caminos. Los vehículos estacionados en pistas o caminos rurales del término municipal, públicos o privados, para carga o descarga de mercancías, no entorpecerán el tránsito rodado y dejarán espacio suficiente para el paso de otros vehículos y personas, debiendo observar, al efecto, las normas del Reglamento de Circulación, en lo que respecta a la señalización.

Respecto al resto de caminos y servidumbres de paso, queda prohibido el estacionamiento de vehículos, así como cualquier otro impedimento que entorpezca el tránsito de vehículos y personas.

Capítulo V. Prohibición de vertidos.

Artículo 18. Prohibición de vertidos.

Con carácter previo, sin perjuicio de la legalidad aplicable y de las competencias que tengan atribuidas otras administraciones de carácter sectorial, se establecen las siguientes prevenciones:

1. Queda prohibido arrojar y tirar en los cauces públicos o privados de arroyos, ríos, barrancos, acequias, desagües y en los caminos, vías pecuarias, etc., objetos como leñas, cañas, brozas, piedras, envases, plásticos, escombros, desechos, basuras y, en general, cualquier otro que pueda impedir el paso de las aguas, que dificulte o altere cualquier servidumbre existente, o sea susceptible de degradar el medio ambiente. Los envases de productos tóxicos serán depositados en contenedores, siempre que esto no conlleve riesgo para la salud. No obstante, habrá que quemar o destruir las ramas procedentes de la poda (en el plazo de un mes desde su realización).

2. Asimismo, queda prohibido tirar o arrojar basuras industriales o domésticas, escombros, desechos o cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos en todo el término municipal, salvo que se disponga de autorización del Ayuntamiento y se realice en vertederos controlados y legalizados, o que estén destinados a abono agrícola.

3. Queda prohibida en las propiedades privadas la acumulación de cualquier desperdicio, desecho o producto en desuso, para evitar que por el viento o por otra causa pueda ser esparcido a propiedades colindantes y causar daños en las mismas.

4. Tampoco se permitirá dar salida a los caminos, cauces de agua y senderos de uso público o particular, a aguas residuales de fregaderos, lavaderos, retretes o cualquier otro vertido de industrias dispersas por el campo. En estos casos, se deberá cumplir la normativa estatal y autonómica sobre vertidos de aguas residuales.

Artículo 19. Reutilización de residuos como fertilizantes.

La eliminación de los residuos, tanto los sólidos como los procedentes de la depuración de las aguas residuales urbanas (lodos), constituye un problema de primer orden para todos los municipios en general y, en especial, para las grandes ciudades.

Los campos de cultivo, junto con la jardinería, reciben más del 50 por 100 de estos lodos, realizando así una labor importante de eliminación de un problema medioambiental, como es la posible contaminación que puedan provocar otras formas de destrucción de estos residuos. Al mismo tiempo, al aportar materia orgánica al terreno, la utilización de estos lodos proporciona a nuestras tierras una mejor estructura del suelo.

Nuestra agricultura contribuye a la valorización de estos residuos urbanos, pero, para que no se produzcan contraindicaciones, hay que utilizar los lodos de manera controlada y de acuerdo a la legislación vigente.

Se entiende por «lodos», los lodos residuales procedentes de todo tipo de estaciones depuradoras de aguas residuales domésticas, urbanas o de aguas residuales de composición similar a las anteriormente citadas, así como los procedentes de fosas sépticas y de otras instalaciones de depuración similares utilizadas para el tratamiento de aguas residuales.

1. Características de los lodos a utilizar como fertilizante.

Para la utilización de lodos de depuradora como abono para la agricultura, éstos deben de cumplir los siguientes criterios:

—Ser lodos de depuración tratados por una vía biológica, química o térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, de manera que se reduzca de forma

significativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización.

—Cumplir con los parámetros establecidos en el cuadro 1.

Cuadro 1. Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su utilización agrícola (mg/kg de materia seca) en función del pH del suelo al que son destinados.

Valores límite

Parámetros	Suelos con pH menor de 7	Suelos con pH mayor de 7
Cadmio.....	20	40
Cobre.....	1.000	1.750
Níquel.....	300	400
Plomo.....	750	1.200
Zinc	2.500	4.000
Mercurio.....	16	25
Cromo	1.000	1.500

Fuente: Anexo I.A del Real Decreto 1.310/1990.

2. Solicitud de utilización de lodos de depuradora en agricultura. Para la utilización de los lodos de depuradora como fertilizante en el término municipal de Gestalgar, se establece la necesidad de obtener una autorización por parte del Ayuntamiento con el fin de poder establecer la idoneidad de dicha utilización en la parcela, la cantidad máxima admisible por el tipo de suelo y el modo de realizarlo.

Para la obtención de la autorización el agricultor deberá aportar antes de realizar el vertido la siguiente documentación:

—La documentación expedida por el titular de la entidad gestora de donde proceda el lodo, que debe incluir información sobre el tratamiento que ha sufrido y la composición del mismo (materia seca, materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo y metales pesados). El análisis realizado a la partida homogénea del lodo aportado con una antigüedad inferior a seis meses, y la documentación justificativa de la fecha de carga y lugar de carga de dichos lodos.

Metales pesados: Cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn), mercurio (Hg) y cromo (Cr).

—Un análisis de suelo de donde se reflejen los parámetros contenidos en el cuadro número 2, indicando la fecha de realización del análisis e identificando claramente la parcela donde se pretende realizar el aporte.

Cuadro 2. Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos (mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos), en función de su pH.

Valores límite

Parámetros	Suelos con pH menor de 7	Suelos con pH mayor de 7
Cadmio.....	1	3
Cobre.....	50	210
Níquel.....	30	112
Plomo.....	50	300
Zinc	150	450
Mercurio.....	1	1.5
Cromo	100	150

Fuente: Anexo IA de Real Decreto 1.310/1990.

3. Autorización de utilización de lodos de depuradora.

Con los documentos presentados en la solicitud, el Ayuntamiento realizará la autorización pertinente si se cumpliesen los requisitos exigibles por la legislación y estas ordenanzas, indicando la cantidad máxima que puede soportar dicha parcela.

4. Prohibiciones.

—El acopio de lodos de depuradora en cualquier parcela o propiedad, los lodos, sin sobrepasar la cantidad máxima admisible, serán enterrados en un plazo no superior a 3 días, con el fin de evitar la formación de costras, para evitar pérdidas de amoníaco y emisión de malos olores y para distribuirlos uniformemente en el perfil del suelo.

—No aplicar lodos tratados en praderas, pastizales u otros cultivos que pueda utilizar directamente el ganado dentro de las tres semanas siguientes a la fecha de aplicación.

—No aplicar lodos tratados en cultivos hortícolas y frutícolas (con la excepción de los árboles frutales) durante su ciclo vegetativo o en un plazo inferior a diez meses antes de la recolección, ni durante la misma, cuando se trate de cultivos hortícolas o frutícolas cuyas

partes a comercializar y consumir en fresco estén en contacto directo con el suelo.

Capítulo VI. Fuegos y quemas.

Artículo 20. Fuegos y quemas.

Con entera observancia de lo prevenido en la legislación aplicable, la realización de fuegos y quemas de rastrojos en la propia finca, se adaptará a las normas y calendarios de fechas que establezca la conselleria competente en materia de agricultura y medio ambiente (Plan de Quemas).

Artículo 21. Infracciones.

1. El incumplimiento, aún a título de simple inobservancia, de lo preceptuado en la presente ordenanza municipal constituirá infracción administrativa.

2. La responsabilidad administrativa derivada del procedimiento sancionador será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que serán tasado por la Comisión de Valoración, constituida en el seno del Consejo Agrario Municipal, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción, en el plazo que al efecto se determine y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

Artículo 22. Sanciones.

1. Las sanciones a imponer serán las determinadas en la legislación sectorial aplicable o, en su defecto, conforme a lo establecido en el título IX y disposiciones correspondientes de la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, o en la norma que venga a sustituirla.

2. Cuando el Consejo Agrario Municipal actúe en función de arbitraje entre las partes que mantengan un conflicto privado determinará la forma en que ha de quedar reparado el daño causado, siendo esta resolución obligatoria para las partes, en los términos establecidos por el Código Civil y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

3. Será órgano competente para imponer la sanción derivada del procedimiento instruido al efecto, el alcalde, pudiendo delegar esta competencia, conforme a lo establecido en la Ley 11/1999, de 21 de abril, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Para hacer efectiva la sanción pecuniaria, el Ayuntamiento de Gestalgar podrá hacer uso de las prerrogativas otorgadas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incluida la vía de apremio cuando la sanción administrativa sea firme en vía administrativa. El ingreso del importe de la sanción se hará efectivo en la Tesorería Municipal o en cualquier entidad bancaria colaboradora del Ayuntamiento, en los plazos establecidos en la normativa de recaudación.

Artículo 23. Procedimiento.

1. Será regulado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, teniendo en cuenta que se procurará que el órgano instructor sea el concejal responsable del área y que dentro del período probatorio, y en caso de que los hubiera, se incluirá la tasación de los daños y perjuicios, realizada por la Comisión de Valoración, constituida en el seno del Consejo Agrario Municipal.

2. Cuando la denuncia se refiera a hechos que sean de competencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, se remitirá inmediatamente al órgano judicial competente, absteniéndose el Ayuntamiento de instruir procedimiento sancionador en tanto no haya recaído resolución judicial al respecto.

Disposiciones adicionales

Primera.—En las zonas de borde entre el suelo urbano y urbanizable y el no urbanizable, se deberá garantizar, a través del correspondiente programa de actuación integrada, el adecuado acceso a las fincas rústicas exteriores a la actuación.

Segunda.—Se faculta expresamente a la Alcaldía Presidencia para que, en el plazo de un año desde la fecha de aprobación de esta ordenanza, apruebe el Catálogo de Caminos Rurales Municipales (también el de abrevaderos, el de vías pecuarias y el de refugios).

Tercera.—En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza, el Consejo Agrario Municipal deberá crear la Comisión de Valoración a la que se refiere el artículo 5.

Disposiciones finales

Unica.—Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Contra el acuerdo definitivo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en las formas y plazos que establezcan las normas reguladoras.

Gestalgar, a 5 de octubre 2006.—El alcalde, Raúl Pardos Peiró.

24002

Ayuntamiento de Alboraya

Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Taller de Convivencia.

ANUNCIO

El pleno del Ayuntamiento de Alboraya, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Taller de Convivencia, el texto íntegro de la cual se transcribe a continuación:

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del Servicio de Taller de Convivencia para la Tercera Edad.

Artículo 2.º El Servicio de Taller de Convivencia para la Tercera Edad consiste servicios específicos de soporte preventivo para las personas mayores, mediante una oferta especializada de actividades lúdicas y rehabilitadoras:

- a) Actividades de mantenimiento y rehabilitación.
- b) Atención asistencial y tratamiento integral que evite o retarde el internamiento en centros residenciales.
- c) Soporte y seguimiento a personas mayores con problemática social y sanitaria.
- d) Prevención de situaciones de marginación y aislamiento.
- e) Incremento del nivel de bienestar físico y psicosocial.
- f) Propiciar la autonomía personal.
- g) Ofrecer períodos de descanso a la familia cuidadora.

El Ayuntamiento prestará este servicio por sí o por medio de empresa especializada en este tipo de servicios.

Artículo 3.º Tendrán la consideración de precios públicos regulados en esta ordenanza, las contraprestaciones pecunarias por el servicio definido en el artículo anterior.

Artículo 4.º El presente acuerdo de imposición y regulación será de aplicación en todo el término municipal de Alboraya.

Artículo 5.º Serán beneficiarias las personas que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento o bases que necesariamente deberán ser aprobados junto a este precio público.

Artículo 6.º Estarán obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, en las cantidades no subvencionadas según el reglamento a que se refiere el artículo 12, los usuarios o beneficiarios del servicio o quienes lo soliciten en su nombre.

Artículo 7.º El pago del precio público se abonará con anterioridad a la prestación del servicio.

Artículo 8.º La cuantía del presente precio público queda fijada según el cuadro de tarifas adjunto, con cantidades expresadas en euros:

A) Horario de 9 a 17 horas:

Servicio	Precio mes	Precio día (1 a 10)	Precio hora (1 a 8)
Modalidad de estancia de día	252,00		
Modalidad de estancia temporal		18,00	
Modalidad de respiro familiar			3,00
Servicio de comedor:			
4,50 euros por día o 94,50 euros por mes (21 días de servicio).			
Artículo 9.º Para la continuidad de la prestación, es condición necesaria estar al corriente del pago del mes anterior. Su impago causará baja en la prestación del servicio sin perjuicio de su cobro por vía ejecutiva.			